



Firmar el TPP, un paso atrás para Canadá

Ottawa, Toronto, Montreal - 29 de enero 2016- Después de un acuerdo en principio hacia una Asociación Trans-Pacífico (TPP), anunciado el 5 de octubre 2015 después de más de cinco años de negociaciones secretas, los ministros de los 12 países del TPP ahora planean reunirse en Auckland Nueva Zelanda el 04 de febrero para firmar formalmente el acuerdo. El momento de la firma importa ya que permite a los países comenzar el proceso de ratificación legislativa.

El gobierno liberal de Canadá se comprometió a ser "transparente, abierto y consultivo" con los canadienses antes de una ratificación del TPP. Como parte de este compromiso, la Ministra de Comercio Chrystia Freeland se ha embarcado en una serie de reuniones con un número limitado de participantes mientras invita a que los Canadienses envíen sugerencias y comentarios en un buzón electrónico del gobierno. Esto no deja de recordarnos los procedimientos de gobiernos liberales anteriores y en otros países cuando hace 15 años negociaban en secreto el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); tales procesos son cualquier cosa menos consultivo.

La Ministra Freeland ha dicho que el gobierno no ha tomado una decisión todavía. Pero firmar el acuerdo TPP y su falta de voluntad para consultar las redes multisectoriales más grandes del país –como la Red de Comercio Justo (TJN), Common Frontiers y la Red quebequense frente a la Integración Continental (RQIC)– envían otra señal. Estas coaliciones deploran la falta de respuestas de la Ministra Freeland a las reiteradas invitaciones del Senado de México para participar en un diálogo Parlamentario Internacional sobre el TPP, junto con legisladores de Estados Unidos, Perú, Chile, en México el 28 de enero. La reunión forma parte de un encuentro internacional más amplio que reúne a movimientos sociales populares de los países del TPP en las Américas que tienen profundas preocupaciones sobre el mega acuerdo.

Al firmar un acuerdo cuyos beneficios son altamente cuestionados, el gobierno de Canadá dará un paso más hacia el aumento de las restricciones a la capacidad del Estado para regular en función del interés público, en áreas no directamente relacionadas con el comercio, como la producción de alimentos de calidad, el acceso a los medicamentos, el sistema de salud pública, los derechos en internet, el medio ambiente, la acción por el clima y las normas laborales. El acuerdo empuja hacia abajo los salarios y las condiciones laborales; fomenta aún más la externalización y la deslocalización, contribuyendo así a la ampliación de las desigualdades en Canadá y en los otros países del TPP.

El TPP también incluye el antidemocrático mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS) que permite a las empresas multinacionales demandar a los gobiernos sobre las regulaciones y políticas que consideren que afecta su inversión. Tales demandas no son escuchadas en los tribunales nacionales, sino que se deciden por tres árbitros,

pagados y cuya imparcialidad es altamente polémica, y pueden imponer enormes multas contra los gobiernos electos, sin que se pueda apelar su decisión. Las excesivas protecciones de los inversionistas amenazan a la democracia y a los derechos constitucionales, eluden y debilitan nuestro sistema judicial, y costarán a los contribuyentes miles de millones de dólares en compensaciones a las empresas que colocan demandas con el ISDS. Cabe resaltar que en el [informe](#) del experto independiente de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, el ISDS amenaza los derechos humanos y debe ser retirado de todos los acuerdos comerciales.

El TPP también representa un paso atrás en la protección del medio ambiente. El capítulo sobre medio ambiente no sólo incluye requisitos minimalistas y es poco ambicioso -como en los acuerdos comerciales anteriores- sino que no contempla ningún mecanismo de obligación vinculante. En efecto, el lenguaje del texto es vago y sin dientes, muy por debajo de las firmes medidas que los países deben adoptar para contrarrestar las prácticas ambientales depredadoras y proteger la tierra, el aire, el agua y la vida silvestre. Peor aún, el acuerdo crea un escalofrío regulatorio en los gobiernos en el momento de formular nuevas políticas para enfrentar el cambio climático.

Las organizaciones de la sociedad civil en Canadá y Quebec alertan sobre el afán del gobierno canadiense en querer firmar el TPP, a pesar de las graves inquietudes de la sociedad civil por los impactos del acuerdo. Un [reciente estudio](#) realizado por investigadores del Instituto de Desarrollo y el Medio Ambiente Mundial de la Universidad Tufts revela que el acuerdo conllevará la pérdida de 58,000 empleos en Canadá y aumentará la desigualdad de ingresos. Del mismo modo, el sindicato más grande del sector privado de Canadá UNIFOR dice que el acuerdo pone en peligro más de 26,000 puestos de trabajo en el sector automotriz canadiense, tanto en plantas de montaje como en autopartes. El TPP es un mal acuerdo para Canadá y pone el interés público en riesgo.

Debido a que el acuerdo debe ser ratificado como se acordó, y no se permiten modificaciones, se les atará las manos durante décadas al gobierno y a los legisladores, restringiendo su capacidad de actuar por sus poblaciones. En definitiva, la nueva generación de acuerdos de libre comercio e inversiones, como el TPP, no buscan favorecer los intercambios comerciales sino consolidar un sistema de reglas que aumentan los “derechos” de las empresas transnacionales. Tratan de cambiar radicalmente las correlación de fuerzas en los países desplazándolo el poder soberano de los gobiernos electos y de los tribunales nacionales hacia los plutócratas del mundo.

Más información:

Raul Burbano, burbano@rogers.com / [Common Frontiers](#) / cel. 416-522-8615

Pierre-Yves Serinet, rpic@ciso.qc.ca / [Red quebequense frente a la integración continental](#) / cel. 438-396-6284

Larry Brown, lbrown@nupge.ca / [Trade Justice Network](#) / cel. 613-228-9800